

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

En estos autos Rol N° C-29715-2019 del Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda deducida en contra del fisco condenándolo a pagar, a título de indemnización por daño moral, la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos), al demandante Miguel Julio Soto Ramos, con los reajustes e intereses desde que la sentencia queda firme, esto es desde que se dicta el cúmplase, de conformidad al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de seis de diciembre de dos mil veintidós, confirma con declaración que el demandado queda condenado al pago de la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos) a título de indemnización por daño moral, más los reajustes e intereses desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada, desde que se dicte el cúmplase, quedando eximido del pago de las costas de la causa.

Contra esa sentencia el Consejo de Defensa del Estado, dedujo recurso de casación en la forma, el que se ordenó traer en relación.

**Considerando:**

1º) Que, el Consejo de Defensa del Estado deduce recurso de casación en la forma fundado en el artículo 768 N° 5 en relación 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil. Indica que la sentencia recurrida no contiene consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento para el aumento del monto de la



indemnización, lo que resulta evidente al analizar cada uno de los considerandos del fallo recurrido.

Refiere que la sentencia en contra de la cual se recurre ha sido pronunciada omitiendo las consideraciones de hecho o derecho exigidas por la ley, y que sirvan de explicación y justificación a la decisión adoptada en alzada de aumentar el monto de la indemnización fijado en la sentencia apelada. En efecto, al decidir del modo indicado, los sentenciadores señalaron argumentos para condenar, pero no argumentos para fijar el nuevo monto, sin señalar ni analizar especiales consideraciones, lógicas y racionales, que funden el significativo aumento en la sanción indemnizatoria aplicada.

Pide que se invalide la sentencia recurrida y acto seguido, sin nueva vista, pero separadamente, dicte con arreglo a la ley la correspondiente sentencia de reemplazo mediante la cual confirme la sentencia definitiva de primera instancia.

**2º)** Que, de la lectura del recurso se advierte que lo que se les reprocha a los jueces del fondo es haber aumentado la indemnización por el daño moral padecido por el demandante sin efectuar las debidas consideraciones de hecho y de derecho que sirven de apoyo a su decisión judicial

Con estos argumentos solicitó la invalidación de la sentencia, a fin que en su reemplazo se resuelva acoger la demanda en todas sus partes, determinando el monto indemnizatorio que fijó el tribunal de primera instancia.

**3º)** Que son hechos asentados en el fallo de primera instancia en su considerando octavo, confirmados por el fallo de segundo grado los siguientes:

*1.- Que el demandante, don MIGUEL JULIO SOTO RAMOS, RUN: 5.581.941-6, se encuentra reconocido bajo el número 23724, en el documento*



*público denominado “Nómina de personas reconocidas como víctima”, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.*

*2.- Que el actor fue evaluado por profesionales del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), organismo que con fecha 1 de octubre de 2020, certificó: (a) que don MIGUEL JULIO SOTO RAMOS fue gravemente afectado en su salud física, mental, moral y social por agentes del Estado de Chile; (b) que la referida persona, sufre de un síndrome por estrés post traumático complejo crónico, y además, presenta secuelas físicas crónicas en su espalda y genitales, lo que le obliga a estar en reposo en cama por períodos prolongados de tiempo; (c) que, además, producto de los golpes que recibió en la comisaría de Coquimbo, le fracturaron tres costillas del costado izquierdo, lo que también le produce intensos dolores con el frío; y (d) que, asimismo, producto de las torturas, sufre de depresión, neurosis aguda y claustrofobia.*

*3.- Que, asimismo, don MIGUEL JULIO SOTO RAMOS fue sometido a evaluación médica y psicológica en el programa PRAIS – SERVICIO DE SALUD COQUIMBO, organismo que determinó, en definitiva, que, tras la evaluación, existen indicadores de secuelas biopsicosociales en la referida persona, producto de las experiencias represivas experimentadas por ella, concluyendo que existe una correlación clínica entre las experiencias traumáticas del usuario y los daños de carácter permanente en él y su familia, agregando que las evaluadoras tienen la convicción de que la represión sufrida por el usuario por parte de agentes del Estado de Chile, ha impactado de manera directa y negativa en los ejes transversales de su desarrollo vital, manifestando signos de enfermedad grave hasta la actualidad. Concretamente en el aspecto psicológico, señalan que el*



*usuario presenta síntomas ansiosos intensos y trastorno del sueño que se mantienen hasta la actualidad, consumo problemático de alcohol durante la relegación que sufrió –lo cual duró un año- y actualmente presenta tratamiento por cuadro depresivo crónico grave, cuyos síntomas son concordantes con la configuración de un trastorno de estrés postraumático crónico posterior a la experiencia de tortura”. (SIC).*

Agregando luego la sentencia de primera instancia en el motivo décimo sexto, lo siguiente:

*“En este sentido, ha quedado acreditado en el fundamento octavo, en lo pertinente, que don MIGUEL JULIO SOTO RAMOS fue gravemente afectado en su salud física, mental, moral y social por agentes del Estado de Chile, padeciendo actualmente de un síndrome por estrés post traumático complejo crónico, y además, presenta secuelas físicas crónicas en su espalda y genitales, lo que le obliga a estar en reposo en cama por períodos prolongados de tiempo.*

*Además, producto de los golpes que recibió en la comisaría de Coquimbo, se le fracturaron tres costillas del costado izquierdo, lo que también le produce intensos dolores con el frío. Adicionalmente, producto de las torturas, sufre de depresión, neurosis aguda y claustrofobia. Igualmente, se encuentra bajo tratamiento por cuadro depresivo crónico grave, cuyos síntomas son concordantes con la configuración de un trastorno de estrés postraumático crónico posterior a la experiencia de tortura. Todos estos daños son de carácter permanente, impactado de manera directa y negativa en los ejes transversales de su desarrollo vital.*

*A lo anterior se deber agregar el padecimiento por los períodos en que estuvo privado de libertad, en dos ocasiones, la primera en la ciudad de Vallenar,*



*en la comisaría de esa ciudad, entre el 24 al 30 de junio de 1974; y la segunda, entre el 30 de junio de 1974 y el 26 de mayo de 1975, en la ciudad de La Serena, permaneciendo entre el 30 de junio y el 7 de julio de 1974, en el Regimiento Arica de esa ciudad, y el resto del período en recinto penitenciario”.*

4º) Que en relación al vicio de casación formal denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *–en lo que atañe al presente recurso–* en su numeral 4º, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia.

5º) Que esta Corte, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5º transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920, un Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción



entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida *–prosigue el Auto Acordado–* deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe, enseguida, que una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera.

**6°)** Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes



en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017).

**7°)** Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

**8°)** Que útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:



*“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras”* (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250).

**9°)** Que, el que la determinación del monto dinerario que permita en algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, deba necesariamente realizarse *prudencialmente*, ante la imposibilidad de fijar con alguna exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no conlleva que esa evaluación sea arbitraria y antojadiza para el órgano jurisdiccional, sino que ante la imposibilidad de concretarla sirviéndose de fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela y moderación, lo que por cierto le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, pero que no implica en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a arribar a esa conclusión.

**10°)** Que, al dictar la sentencia impugnada confirman la sentencia apelada con declaración que aumenta el monto de la indemnización ordenada por daño moral respecto del demandante a la suma de \$100.000.000 (cien millones de





pesos), los sentenciadores se hacen cargo de los motivos que los llevaron a incrementar el monto conforme se aprecia del motivo sexto señalando *“Que, finalmente, esta Corte comparte los fundamentos invocados por el juez de primera instancia para determinar la procedencia del resarcimiento reclamado, estableciendo la existencia de padecimientos que deben ser indemnizados por constituir el daño moral que sustenta la demanda. Sin perjuicio, de que se estima que el monto fijado es insuficiente para resarcir al actor y cumplir con el principio de reparación integral que rige en la materia, considerando la entidad de los mismos al haber sido gravemente afectado en su salud física y psíquica, con daños permanentes. En efecto, ha quedado establecido que padece de un síndrome de estrés post traumático complejo, que comprende depresión, neurosis aguda y claustrofobia y de secuelas físicas crónicas en su espalda y genitales, lo que lo obliga a estar en reposo en cama por períodos prolongados de tiempo y de intensos dolores con el frío en sus costillas debido a las fracturas que sufrió con las torturas y golpizas a las que fue sometido, todo lo cual lleva a elevar el quantum de la indemnización a la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos) que se considera acorde con el pretium doloris del demandante.”* (SIC)

**11°)** De lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil le impone, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen. Distinto es el caso que el impugnante no comparta los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma en particular en cuanto a sus requisitos legales, sin embargo dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que sólo está dirigida a



controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación sustancial, motivo por cual se desestimara la causal de nulidad formal en análisis, por tal razón el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 766, 768 N° 5, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol 9.645-2022, la **que no es nula**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Dahm

N° 292-2023





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

